

MEMENTO EXPERTO  
FRANCIS LEFEBVRE

Reforma de la  
Ley de  
Procedimiento  
Laboral

ACTUALIZADO A MAYO 2010

Memento Experto Reforma de la Ley de Procedimiento Laboral  
es una obra colectiva realizada por  
iniciativa y bajo la coordinación de  
**Ediciones Francis Lefebvre**

Han intervenido en su realización:

**Aramendi Sánchez, Pablo**

(Magistrado. Juzgado Social núm 33 de Madrid)

**Barrio Pelegrini, Rosario**

(Secretario Judicial. Juzgado de lo Social núm 1 de Madrid)

**Bodas Martín, Ricardo**

(Presidente de la Sala de lo Social. Audiencia Nacional)

**Desdentado Bonete, Aurelio**

(Magistrado Sala IV Tribunal Supremo)

**Domínguez Velasco, Teresa**

(Secretario Judicial. Juzgado de lo Social núm 33 de Madrid)

**Linares Polaino, Juan Antonio**

(Socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira)

**Martín Contreras, Luis**

(Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional. Profesor Asociado de Derecho Procesal Universidad Carlos III)

**Palomo Balda, Emilio**

(Magistrado. Sala Social TSJ País Vasco)

**Sanfulgencio Gutiérrez, José Antonio**

(Consejero Asesor Departamento Laboral. Garriges Abogados y Asesores Tributarios)

**Varas García, Pilar**

(Magistrada Juez. Juzgado de lo Social núm 8 de Madrid)

© EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S. A.

Santiago de Compostela, 100. 28035 Madrid. Teléfono: (91) 210 80 00. Fax: (91) 210 80 01

[www.efl.es](http://www.efl.es)

Precio: 43,68 € (IVA incluido)

ISBN: 978-84-92612-86-4

Depósito legal: M-25605-2010

Impreso en España

por Printing'94

Puerto Rico, 3. 28016 Madrid

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, [www.cedro.org](http://www.cedro.org)) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

## PLAN GENERAL

### CAPÍTULO I

#### Reforma procesal de 2009 y el proceso social

Aurelio Desdentado Bonete

*Magistrado Sala IV Tribunal Supremo*

<b>A. Objeto y alcance de la reforma</b>	28
<b>B. Modificaciones en la «parte general» de la Ley de Procedimiento Laboral</b>	33
1. Jurisdicción y competencia	33
2. Partes	34
3. Acumulaciones	35
4. Régimen jurídico de los actos procesales	42
Actuaciones procesales	42
Resoluciones procesales	44
Actos de comunicación	45
<b>C. Proceso ordinario</b>	47
1. Admisión de la demanda	47
2. Acto de juicio	52
Citación	52
Conciliación	53
Acto de juicio y su documentación	54
Prueba	58
Sentencia	59
<b>D. Modalidades procesales</b>	61
<b>E. Recursos y medios de impugnación de la cosa juzgada</b>	63
1. Recursos no devolutivos	63
Recursos contra las resoluciones del secretario	63
Recurso de reposición contra resoluciones judiciales	66
Depósitos	67
2. Recursos devolutivos	69
Recurso de suplicación	69
Recursos de casación	70
Recurso de queja	71
Disposiciones comunes aplicables a los recursos devolutivos de carácter extraordinario	72
3. Medios de impugnación de la cosa juzgada. Revisión de sentencias	85
<b>F. Ejecución</b>	88

**CAPÍTULO II****La reforma que viene del procedimiento laboral**

Pablo Aramendi Sánchez

*Magistrado. Juzgado Social núm 33 de Madrid*

<b>A. Coordinadas históricas de la L 13/2009</b>	105
1. Objetivos de la reforma	105
2. Reformas normativas adoptadas y su descoordinación	125
3. Caracterización general de la reforma de las leyes procesales	135
<b>B. Aspectos más conflictivos de la reforma para el proceso laboral</b>	180

**CAPÍTULO III****La distribución de competencias entre juez y secretario en el proceso:  
resoluciones y recursos**

Emilio Palomo Balda

*Magistrado. Sala Social TSJ País Vasco*

<b>A. Nuevas funciones del secretario en el proceso laboral</b>	210
1. Aspectos generales	212
a. Presupuestos procesales del órgano jurisdiccional	212
b. Partes procesales	225
c. Objeto del proceso	250
d. Actos procesales	265
2. Proceso declarativo	275
a. Admisión de la demanda	277
b. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio	295
c. Suspensión de los actos de conciliación y juicio	315
d. Desistimiento	317
e. Acto de conciliación intraprocesal	319
f. Acto de juicio	333
g. Modalidades procesales	335
3. Recursos de Suplicación y de Casación	337
a. Recurso de Suplicación	339
b. Recurso de casación ordinario	345
c. Recurso de casación para la unificación de doctrina	347
d. Disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación	351
4. Proceso de ejecución	353
a. Ejecución definitiva	356
b. Ejecución dineraria	359
c. Ejecución de sentencias firmes de despido	366
d. Ejecución provisional	367
<b>B. Resoluciones de los Secretarios judiciales</b>	368
1. Clases de resoluciones y criterios para su delimitación	369
2. Forma de las resoluciones	374
3. Resoluciones orales	375
4. Libro de decretos	376
5. Aclaración	378
6. Nulidad	382

<b>C. Recursos contra las resoluciones de los Secretarios judiciales</b>	383
1. Recurso de Reposición	385
2. Recurso de Revisión	391

#### CAPÍTULO IV

##### Acumulación de acciones, procesos y recursos

Pilar Varas García

*Magistrada Juez. Juzgado de lo Social núm 8 de Madrid*

1. Introducción	400
El concepto de pretensión	405
Tipos de pretensiones	407
Legitimación plural y pluralidad de objetos procesales	409
Clasificación de los supuestos de acumulación	411
2. La reforma	415
3. Acumulación de acciones (LPL art.27 y 28)	420
Anterior regulación del art.27 LPL	420
Nueva regulación del art.27 LPL	425
Desacumulación de acciones	435
4. Acumulación de procesos (LPL art.29 a 32)	440
Regulación anterior de los artículos 29 y 30 LPL	442
Regulación de los art.29, 30 y 30 bis LPL por la Ley 13/2009	450
Acumulación de procesos de oficio (LPL art.31)	460
Acumulación de procesos de despido y de resolución de contrato por voluntad del trabajador (LPL art.32)	465
Desacumulación de procesos (LPL art.34.3)	467
5. Acumulación de recursos (LPL art.33, 34.2 y 232)	470
6. Disposiciones comunes (LPL art.34 y 34)	475
Bibliografía	480

#### CAPÍTULO V

##### Reforma de actos procesales y de comunicación

Luis Martín Contreras

*Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional. Profesor Asociado de Derecho Procesal  
Universidad Carlos III*

<b>A. Introducción</b>	505
<b>B. Supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil</b>	515
<b>C. Actos procesales</b>	538
<b>D. Actos de comunicación: cuestiones generales</b>	545
1. Clasificación	550
2. Aspectos generales a todos los actos de comunicación	552
3. Personas a las que se debe notificar	554
4. Funcionarios que materializan el acto de comunicación	565
5. Cédula y copia	568
6. Respuesta del interesado	570
7. Servicios comunes	573
8. Nulidad y subsanación de los actos de comunicación	575
9. Responsabilidad de los funcionarios intervinientes	580
10. Auxilio judicial	585

<b>E. Forma de los actos de comunicación</b>	590
1. Cuestiones generales	595
2. Materialización de los actos de comunicación	605
3. A las personas que nos son parte	645
4. Especial referencia a los actos de comunicación con las Administraciones Públicas	650
<b>D. Oficios y mandamientos</b>	660

## CAPÍTULO VI

### Admisión de la demanda

#### (Incompetencia territorial, subsanación, admisión de la demanda y de la prueba)

Juan Antonio Linares Polaino

*Socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira*

<b>A. Incompetencia de los órganos jurisdiccionales</b>	715
1. Carácter imperativo de la competencia territorial	715
2. Momento procesal para la apreciación de la incompetencia	730
3. Apreciación de la incompetencia a instancia de parte	740
<b>B. Requisitos de la demanda: continuidad</b>	750
<b>C. Subsanación de la demanda</b>	765
1. Obligación del secretario judicial de advertir los defectos de la demanda	765
2. Ausencia de subsanación: resolución del Tribunal	777
3. Otras modalidades procesales	780
<b>D. Periodos entre la notificación de la demanda y la celebración del acto del juicio</b>	785
1. Periodo general	785
2. Periodo específico para el Abogado del Estado, el Letrado de la Administración de la Seguridad Social y CCAA	790
3. Otras modalidades procesales	792
<b>E. Admisión de la prueba</b>	795
1. Solicitud de la prueba que requiera citación o requerimiento antes del juicio	795
2. Admisión de la prueba en otras modalidades procesales	798

## CAPÍTULO VII

### Señalamiento de juicio y acto de conciliación

José Antonio Sanfulgencio Gutiérrez

*Consejero Asesor Departamento Laboral. Carriges Abogados y Asesores Tributarios*

<b>A. Señalamiento de juicio</b>	805
1. Notas características	805
Plazos entre citación y señalamiento	806
Competencia	807
2. Agenda de señalamientos desde los servicios comunes	815
3. Sucesión de los actos de conciliación y juicio	820
4. Señalamientos excepcionales por el juzgador	825
<b>B. Suspensión del juicio</b>	830
<b>C. Conciliación ante el secretario judicial</b>	835
1. Características	835
2. Asistencia de las partes en el trámite conciliatorio	840
3. Supuestos exceptuados del trámite de conciliación	845

4.	Conciliación con avenencia .....	850
	Aprobación del acuerdo .....	850
	Eventual apreciación de vicios .....	852
	Eventual conciliación posterior .....	853
	Acta de la conciliación .....	856
	Eficacia de la conciliación .....	862
	Impugnación del acuerdo .....	864
5.	Conciliación sin avenencia .....	870
6.	Salario del día del acto de conciliación .....	875
7.	Alteración del usus fori del suplico de la demanda con las nuevas competencias de los Secretarios Judiciales .....	880
<b>D.</b>	<b>Derecho transitorio</b> .....	885
<b>E.</b>	<b>Reflexiones finales</b> .....	890
	<b>Bibliografía</b> .....	895

## CAPÍTULO VIII

### Juicio oral tras la entrada en vigor de la Ley 13/2009

Ricardo Bodas Martín

*Presidente de la Sala de lo Social. Audiencia Nacional*

<b>A.</b>	<b>Reforma del juicio oral en el proceso laboral en el marco de la reforma de la oficina judicial</b> .....	1005
<b>B.</b>	<b>Nuevo juicio oral en el proceso laboral</b> .....	1010
1.	Conciliación judicial tras la reforma .....	1010
2.	Dación en cuenta .....	1015
3.	Alegaciones del demandante .....	1020
4.	Alegaciones del demandado .....	1025
a.	Afirmación o negación de los hechos de la demanda y exposición sobre su propio relato de hechos .....	1025
b.	Excepciones procesales .....	1030
c.	Reconvención .....	1035
d.	Identificación de los hechos conformes o disconformes .....	1040
5.	Alegación de falsedad en los documentos .....	1050
<b>C.</b>	<b>Novedades en materia probatoria</b> .....	1060
1.	Solicitud de pruebas, que requieran diligencias de citación o requerimiento .....	1060
2.	Prueba de interrogatorio de partes .....	1065
3.	Prueba de interrogatorio de testigos .....	1070
4.	Prueba pericial .....	1075
5.	Aportación telemática de documentos .....	1080
6.	Prueba de expertos .....	1085
7.	Vigencia de la LPL art.96 y 179.2 cuando se impute discriminación por razón de sexo .....	1090
8.	Diligencias finales .....	1095
<b>D.</b>	<b>Potenciación de las garantías de los justiciables: nuevo soporte telemático para el desarrollo de las vistas</b> .....	1100
1.	Obligación de grabar todas las vistas .....	1100
2.	Requisitos para regular el registro videográfico del juicio. Ajuste de la fe pública judicial a las nuevas tecnologías .....	1105
a.	Requisitos y garantías del registro .....	1105

b.	Supuestos en los que existe sistema de grabación, que no cuenta con los mecanismos de garantía exigidos .....	1108
c.	Supuestos en los que no haya medios de registro .....	1110
3.	Excepción a la norma general .....	1115
<b>Bibliografía</b>	.....	1120

## CAPÍTULO IX

### Reforma de ejecución de sentencias

Teresa Domínguez Velasco

*Secretario Judicial. Juzgado de lo Social núm 33 de Madrid*

Rosario Barrio Pelegrini

*Secretario Judicial. Juzgado de lo Social núm 1 de Madrid*

<b>A.</b>	<b>Introducción</b> .....	1205
<b>B.</b>	<b>Orden general de ejecución</b> .....	1210
<b>C.</b>	<b>Despacho de ejecución</b> .....	1225
1.	Ejecución definitiva: ejecución dineraria .....	1225
a.	Despacho de ejecución .....	1225
b.	Oposición a la ejecución .....	1235
c.	Embargo .....	1238
d.	Realización de bienes embargados. Subasta .....	1250
e.	Pago .....	1260
2.	Especialidad sentencias de despido .....	1270
3.	Especialidad sentencias de Seguridad Social y Entes públicos .....	1275
4.	Especialidad ejecución actas de conciliación .....	1280
<b>D.</b>	<b>Ejecución parcial</b> .....	1290
<b>E.</b>	<b>Ejecución provisional</b> .....	1300
1.	Sentencias condenatorias al pago de cantidad .....	1305
2.	Sentencias condenatorias en materia de Seguridad Social .....	1307
3.	Sentencias de despido .....	1310
4.	Sentencias condenatorias recaídas en otros procesos .....	1314
5.	Normas comunes a la ejecución provisional .....	1316
<b>F.</b>	<b>Acumulación de ejecuciones</b> .....	1320
<b>G.</b>	<b>Tercerías</b> .....	1328
<b>H.</b>	<b>Tasación de costas</b> .....	1330
<b>I.</b>	<b>Jura de cuentas</b> .....	1345
<b>J.</b>	<b>Liquidación de intereses</b> .....	1350

## ANEXOS

Ley de Procedimiento Laboral (RDLeg 2/1995 modif L 13/2009 art.10) .....	1500
Ley 1/2000, de 7 de enero de 2000, de Enjuiciamiento Civil .....	1550



## PRÓLOGO

La reforma de la LPL, amplia e insistentemente reclamada, surge en el ámbito de una **reforma general** que, como es conocido, **afecta a la totalidad de las Leyes Procesales**.

El instrumento legislativo utilizado para su modificación, es la **Ley 13/2009, de 3 de noviembre**, su finalidad real y para la que había sido insistentemente reclamada, no es otra que contribuir, junto a otra normativa modificada o generada bajo la misma cobertura de legislación, a la implantación de la Oficina Judicial.

Sobre esta Ley y su finalidad es preciso referirnos a algunos de sus **antecedentes**, todos ellos generados con un mismo propósito: el funcionamiento de la Justicia, propósito que tiene su antecedente en la LO 19/2003, incentivada por otros dos acontecimientos previos afectantes a la misma, el **Pacto de Estado para la reforma de la Justicia** y la **Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia**. El primero de ellos fue suscrito el 28 de Mayo de 2001 y la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, el día 16 de abril de 2002). Ambos constituyeron la expresión de una gran preocupación social y de un hondo debate de la ya entonces urgente e inaplazable reforma de la Justicia.

En su momento (CGPJ 8-9-97) el «**Libro Blanco de la Justicia**» había puesto sobre la mesa y transmitido a la sociedad la situación real en ese momento de la Justicia en España y su dramatismo, su ineficiencia y su alejamiento del ciudadano, titular y el más sensible ante la carencia de un servicio público decente. Organizaciones, grupos sociales, instituciones y ciudadanos en general, desorganizados o agrupados, se movilizaron con la clara intención de cambiar nuestro sistema judicial, articulado a través de una reforma legislativa.

### ¿Qué se decía en el Pacto?

«Los españoles, comenzando por los que dedican su vida al servicio de la Justicia, demandan inequívocamente un esfuerzo profundo de mejora y modernización de nuestro sistema judicial.

Carencias tradicionales, sumadas a las nuevas exigencias de una sociedad cada vez más dinámica y compleja y al incremento de la litigiosidad, hacen obligado acometer las reformas necesarias para ello.

Se persigue que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos complicados. Que cumpla satisfactoriamente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de comportamiento y decisión previsibles. Que actúe como poder independiente, unitario e integrado, con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales...»

5

10

15

La exigencia contenida en esta denuncia se concretó en las siguientes **demandas**:

- Un funcionamiento más ágil y eficaz del Tribunal Supremo.
- Mejoras de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permitan potenciar su función con más eficacia y agilidad como intérprete supremo de la Constitución.
- Redefinición de las funciones de los Tribunales Superiores de Justicia atendiendo a criterios de adaptación de la Justicia del Estado de las Autonomías.
- Aprobación de un nuevo mapa judicial que permita acercar la Justicia al ciudadano.
- Ampliación progresiva de plazas de la carrera judicial y su provisión progresiva por Jueces profesionales.
- Elaboración de un nuevo Estatuto de Jueces y Magistrados
- **Secretarios Judiciales.** Se redefinirán las competencias de los Secretarios Judiciales. Constituirán un Cuerpo Nacional de funcionarios técnicos superiores dependientes del Ministerio de Justicia. Se potenciará su papel aprovechando su capacidad y formación procediendo en consecuencia a la reforma de su Estatuto. Se atribuirán nuevas competencias a los Secretarios Judiciales, procediendo a la redefinición de la fe pública que la haga compatible con las nuevas tecnologías. Se les atribuirá facultades plenas de impulso procesal para desarrollar los trámites en que no sea preceptiva la intervención del Juez. Se potenciarán las funciones de ejecución, realización de bienes y jurisdicción voluntaria. Se les atribuirán funciones de dirección de la Oficina Judicial y en los servicios comunes creándose a tal efecto los puestos de Secretario de Gobierno y Secretario Coordinador
- **Oficina Judicial.** Se reformará en profundidad la Oficina Judicial, modernizándola de manera que ofrezca una atención de calidad a los ciudadanos.

20

#### ¿Qué decía la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia?

La Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, como ya se anticipó, se concibió, por su importancia y vistosidad, como proposición de ley, que se aprobó por **unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios**. Sus declaraciones de principios y de intenciones la convierten en otro de los muchos títulos, llamados de interés general, que se inscriben en el capítulo de las buenas intenciones o en infrecuentes arrebatos políticos, aptos para su exhibición en carteles de anuncios de los Órganos Judiciales o, siquiera, y como mucho, como simple recordatorio de aquella vez en que los Grupos sin excepciones se pusieron ocasionalmente de acuerdo para un brindis al sol.

No obstante, los antecedentes anteriores contribuyeron a crear un clima más propicio y generaron la urgencia para esta nueva regulación que ahora presentamos, que fue precedida por la **LO de 19/2003, de 23 de diciembre**, que en su Libro V («De los secretarios judiciales y de la Oficina Judicial») y en su Título I, Capítulo I, reguló la **Oficina Judicial** como organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales (art.435) y dentro de la Oficina, como elemento organizativo básico de su estructura creo la **Unidad** en la que se integrarían los puestos de trabajo vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos. Distinguió la Ley dos tipos de unidades: Unidades Procesales de Apoyo Directo y Servicios Comunes Procesales (art.436). Dedicó al cuerpo de **Secretarios Judiciales** el Título II, dividido en cuatro capítulos en los que se incluyen los artículos 440 al 469, inclusive.

Pero la anterior regulación no completó hasta los límites necesarios la nueva estructura de la Oficina Judicial ni asignó las competencias necesarias a los Secretarios Judiciales, principal tarea que acomete la Ley que ahora analizamos y sobre la cuál y antes de su entrada en vigor, antes incluso de la aprobación parlamentaria, ha sido objeto de **cuidadosos análisis** y de **grandes críticas** por sectores de la Judicatura, Secretarios, Docentes, Operadores jurídicos en general, atacando el proyecto más por motivos de desconfianza que por un análisis serio del propósito que subyace en la misma.

Se desconfía por los **Jueces** por el temor a que las competencias atribuidas al Secretario afectan a la función netamente jurisdiccional, invadiendo competencias judiciales de atribución constitucional, sublimando el concepto de «lo jurisdiccional», robusteciendo el contenido del art.117 de la Constitución.

Se desconfía por parte de los **Secretarios** porque temen que se menoscabe el ejercicio de las funciones que la Ley les atribuye.

Se desconfía por los otros operadores, **Abogados, Procuradores y Graduados Sociales** por el deslinde de las competencias y las dificultades de orden incluso físico para ejercer su función.

Pero la **Ley ya ha entrado en vigor** pese a todas las dificultades, incluidas las faltas de dotaciones económicas, el insuficiente sistema operativo de las nuevas tecnologías, los defectos de los sistemas y la imposibilidad de sus conexiones, etc.

Ha sido un largo periodo de travesía del desierto, pero hoy (es decir, en nuestro actual tiempo social y político), tras muchos desencuentros, egoísmos, pulsos de fuerzas políticas y rivalidades de los sectores profesionales concernidos, surge la Ley definitivamente, **antes de dotarla económicamente**, de racionalizar el cómo, el quién y el cuándo de su puesta en marcha, sin medios informáticos suficientes y sin homologación o compatibilización de los existentes, sin la creación de órganos de ámbitos globales que, más allá de las mezquindades de «sus territorios», de «sus dotaciones» y de «sus sistemas», contribuyan con urgencia y con generosidad a poner en marcha la Ley, operativa la Oficina, competentes y «hábles» ya los Secretarios y eficaz el proceso.

Si las reservas y las cicaterías se superan, si algunos políticos dejan el círculo en el que ejercen como mandarines, si gestionan el interés general y prestan con solvencia el servicio público que se les demanda, esta será una buena Ley. Y si todos los operadores jurídicos, sin los fáciles pretextos que nos invaden, nos ponemos a ello, tendremos unos Jueces juzgando, unos Secretarios gestionando y resolviendo, un funcionariado comprometido y unos defensores que asuman, de una vez, que también ellos, nosotros, somos «la Justicia» que nos requiere capaces, honestos e involucrados.

Este requerimiento, si se cumple, es la solución.

José Garrido Palacios

Abogado

## CAPÍTULO I

# Reforma procesal de 2009 y el proceso social

AURELIO DESDENTADO BONETE

27

## ÍNDICE

<b>A. Objeto y alcance de la reforma</b>	28
<b>B. Modificaciones en la «parte general» de la Ley de Procedimiento Laboral</b>	33
1. Jurisdicción y competencia	33
2. Partes	34
3. Acumulaciones	35
4. Régimen jurídico de los actos procesales	42
Actuaciones procesales	42
Resoluciones procesales	44
Actos de comunicación	45
<b>C. Proceso ordinario</b>	47
1. Admisión de la demanda	47
2. Acto de juicio	52
Citación	52
Conciliación	53
Acto de juicio y su documentación	54
Prueba	58
Sentencia	59
<b>D. Modalidades procesales</b>	61
<b>E. Recursos y medios de impugnación de la cosa juzgada</b>	63
1. Recursos no devolutivos	63
Recursos contra las resoluciones del secretario	63
Recurso de reposición contra resoluciones judiciales	66
Depósitos	67
2. Recursos devolutivos	69
Recurso de suplicación	69
Recursos de casación	70
Recurso de queja	71
Disposiciones comunes aplicables a los recursos devolutivos de carácter extraordinario	72
3. Medios de impugnación de la cosa juzgada. Revisión de sentencias	85
<b>F. Ejecución</b>	88

## A. Objeto y alcance de la reforma

28

La última reforma del proceso social es claramente una **reforma inducida**, que no ha nacido desde dentro de este proceso, sino que proviene de fuera. No es, por tanto, una respuesta a los problemas específicos de funcionamiento de la jurisdicción social; refleja, por el contrario, un debate que se ha desarrollado en un marco más

general en torno al papel de la oficina judicial y a la distribución de funciones entre el juez y el secretario; un tema que, en nuestra opinión, no era prioritario para la reforma procesal social.

La reforma se ha instrumentado a través de dos leyes: la LO 1/2009, y la L 13/2009, ambas del BOE de 4-11-09 y que entraron en vigor al día siguiente de su publicación la primera (5-11-2009) y a los seis meses la segunda (4-5-2010).

**29** El eje central de la reforma es la **separación entre lo procesal y lo estrictamente jurisdiccional** con el establecimiento, a partir de esa separación, de una distribución de competencias entre el juez y el secretario. Se encomienda, en principio, al **secretario** la gestión del proceso y al **juez** sólo los aspectos estrictamente jurisdiccionales de la administración de justicia. Esta división de funciones se relaciona con el lanzamiento de un **nuevo modelo de oficina judicial**, que se conforma a través de dos unidades básicas:

- la unidad procesal de apoyo directo; y
- los servicios comunes.

**Se ha criticado** esa distribución funcional, señalando su posible incompatibilidad con la delimitación constitucional de la función jurisdiccional y su incidencia negativa sobre la garantía de independencia, aunque **la separación no es radical**, pues el juez, a través de la reserva de determinadas competencias y de los recursos, sigue conservando el control de las decisiones procesales relevantes en orden a la tutela judicial efectiva. La reforma se completa con unos «**objetivos complementarios**» en orden al reforzamiento de las garantías del justiciable, el fomento de las buenas prácticas procesales, las mejoras procesales concretas y la modernización técnica de la justicia.

**30** Hay que tener en cuenta que la reforma del proceso laboral se ha producido a través de **dos vías**. La primera es la **reforma directa** del propio texto de la LPL que realiza la L 13/ 2009 art.10. La segunda vía se produce a través de la **supletoriedad** en la medida en que determinadas modificaciones introducidas por la L 13/2009 art.11 van a ser aplicables en el proceso como consecuencia de la LPL disp.final 1ª y de la LEC art.4. Las modificaciones directas son numerosas y las indirectas resultan también relevantes. Se trata de una reforma de envergadura, al menos, en lo relativo a su extensión; sus **efectos en profundidad** sobre el proceso son más discutibles y algunos –como la conciliación– pueden ser negativos.

**31** En la exposición que sigue vamos a centrarnos en las **modificaciones directas** que establece la L 13/2009 art.10 y que afectan a un importante número de artículos de la LPL. Sólo mencionaremos las **modificaciones indirectas** contempladas en la LEC cuando sea preciso para determinar el alcance de alguna de las reformas directas. A continuación se va a distinguir entre las reformas que afectan a la parte general de la LPL y las que se producen en el proceso ordinario, las modalidades procesales, los recursos y la ejecución. Es una aproximación meramente descriptiva.

## B. Modificaciones en la «parte general» de la LPL

### 1. Jurisdicción y competencia

Las modificaciones se extienden con diversa intensidad a lo largo de todo el Libro I de la LPL. En lo relativo a la competencia destaca el cambio en la LPL art.5.1 para establecer que el auto que declara a limine la falta de competencia no se limita a los supuestos de falta de competencia **por razón de la materia** –falta de jurisdicción en sentido estricto y falta de competencia objetiva, hay que entender– y **de la función**, sino que también puede afectar a la falta de competencia **territorial** (nº 715 s.). De esta forma, se rectifica el criterio que se había establecido en unificación de doctrina a partir de la TS Pleno 16-2-04, RJ 2038. De acuerdo con este criterio, la competencia territorial no puede ser estimada de oficio en supuestos de sumisión tácita. Con la reforma se impone la **apreciación de oficio**.

En la LPL art.14 destaca la eliminación de la **inhibitoria**. La modificación de la LPL art.15 tiene escaso interés, pues se limita a la remisión a la LEC en cuanto al régimen de **abstención y recusación** de los secretarios.

33

### 2. Partes

En el Título II, relativo a las partes, hay algunas reformas de escaso calado. La LPL art.18.1 elimina la exigencia de que el **graduado social esté colegiado** a efectos de que pueda otorgársele la representación. Más relevante es la reforma de la LPL art.21.1, que permite a los graduados sociales **intervenir en el recurso de suplicación**. La norma es algo elíptica, porque se limita a indicar que en este recurso «los litigantes habrán de estar defendidos por abogados o representados técnicamente por graduado social colegiado», lo que podría llevar a la conclusión de que la **defensa por abogado** es necesaria, aunque haya representación por graduado social. Pero la utilización de la disyuntiva «o» muestra que la representación técnica del graduado **puede sustituir** la defensa por abogado.

El resto de las modificaciones en esta materia en la LPL arts.19.2, 20.3, 21.3 y 23.2 son **meras adaptaciones** para incorporar las nuevas competencias del secretario judicial.

34

### 3. Acumulaciones

Sin duda, la reforma de mayor trascendencia en el Libro I ha sido la que se ha producido en el Título III en materia de acumulaciones.

35

- 36 Acumulación de acciones** En la acumulación de acciones se mantiene en lo esencial la regulación de la antigua LPL art.27, pero con algunas **innovaciones**. Se aclara que la competencia del órgano judicial limita la posibilidad de acumulación y que en la reconvención también cabe la acumulación de acciones con los mismos requisitos que en la demanda (LPL art.27.1 modif L 13/2009 art.10.12). En la nueva LPL art.27.3 se recoge la acumulación subjetiva de acciones en los mismos términos que en la LEC art.72, lo que ya venía **aplicándose en la práctica** por la vía de la supletoriedad. La **prohibición de acumulación** –ahora en el la LPL art.27.4 modif L 13/2009 art.10.12– se precisa, recogiendo, por una parte, que comprende también las pretensiones sobre movilidad geográfica, modificación de condiciones de trabajo y conciliación familiar, y por otra, que **no afecta** a las pretensiones de indemnización por lesión de los derechos fundamentales (lo que ya había admitido la jurisprudencia desde la TS 12-6-01, RJ 5931). Se introduce una **nueva excepción** al admitir que a la acción de resolución por falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario (ET art.50.1 b) se acumule la reclamación salarial.
- 37 Corresponde al secretario** controlar la concurrencia de los presupuestos de la acumulación (LPL art.27.6 modif L 13/2009 art.10.12). Si se ejercitan **acciones indebidamente acumuladas** es el secretario quien ha de requerir para que se elija en el **plazo** de cuatro días la acción que deba mantenerse, dando cuenta al órgano judicial de la falta de subsanación a efectos del archivo de la demanda (LPL art.28.1 modif L 13/2009 art.10.13). Se añade un nuevo párrafo para el supuesto de acumulación indebida de una **acción de despido con otra** u otras sometidas a plazo de caducidad, para prever que en tal supuesto se seguirá la tramitación del juicio por despido y se tendrá por no formulada la otra o las otras acciones, con advertencia de la posibilidad de ejercitarlas por separado (LPL art.28.2.2º modif L 13/2009 art.10.13).
- 38 Acumulación de procesos** Para la acumulación de procesos se establece ahora su **carácter obligatorio** tanto en el supuesto de acumulación en el mismo órgano judicial (LPL art.29 modif L 13/2009 art.10.15), como en el de distintos órganos judiciales (LPL art.30 modif L 13/2009 art.10.16) y se regula el procedimiento de acumulación en los dos casos. Además, **se extiende** la acumulación obligatoria en los supuestos de conexión entre las pretensiones que, de seguirse por separado, pudieran llevar a **sentencias incompatibles o excluyentes** en sus fallos o en su fundamentación (LPL art.30 bis modif L 13/2009 art.10.17). Se incluyen reglas de procedimiento al efecto.
- 39 Acumulación de recursos** En la nueva regulación de la acumulación de recursos, destaca el establecimiento de su carácter obligatorio cuando se suscite **a instancia de parte** (LPL art.33 modif L 13/2009 art.10.19). La nueva redacción de la LPL art.34 y 35 tiene sólo modificaciones de detalle.
- 40 Acumulación en las ejecuciones** La reforma de la acumulación en las ejecuciones es muy limitada. Se orienta a incorporar las referencias a las nuevas competencias del secretario (LPL art.37, 38 y 39 modif L 13/2009 art.10.22 a 24), así como a introducir algunos cambios de redacción en la LPL art.40 y 41. Más interés tienen las previsiones en la LPL art.37 sobre el **carácter obligatorio** de la acumulación y en la LPL art.38 sobre los criterios aplicables para la **designación del**

**órgano judicial** en el que ha de producirse la acumulación cuando es la misma la antigüedad en el inicio de la ejecución.

#### 4. Régimen jurídico de los actos procesales

**Actuaciones procesales** (LPL Libro I Título IV) Las reformas en los actos procesales afectan a **tres materias**:

- las actuaciones procesales en sentido estricto (capítulo I);
- las resoluciones procesales (capítulo II);
- los actos de comunicación (capítulo III).

En las actuaciones procesales hay modificaciones importantes y otras de mera adaptación. Entre las primeras, se elimina la referencia a la **habilitación a un oficial** para autorizar las actuaciones procesales (LPL art.42 modif L 13/2009 art.10.27) y se **remite** en esta materia **a la LEC**, remisión que opera sobre las previsiones de la LEC art.145 y 146 en relación con la LOPJ art.453.

Se incluye en la **habilidad del mes de agosto** las modalidades de movilidad geográfica, modificación de condiciones de trabajo y conciliación, además de las acciones derivadas de las normas de protección frente a la violencia de género (LPL art.43.4 modif L 13/2009 art.10.28). Se **autoriza al secretario** para habilitar días y horas hábiles en determinados supuestos. Se elimina la presentación de escritos en el **juzgado de guardia** (LPL art.45 modif L 13/2009 art.10.29), acabando así con el régimen dual de presentación que se derivaba de la doctrina del Tribunal Supremo (TS auto 18-7-01, RJ 7015).

Se reconoce también la **competencia sancionadora** del secretario en las incidencias de devolución de autos (LPL art.48 modif L 13/2009 art.10.31).

**Resoluciones procesales** (LPL art.49 a 52 modif L 13/2009 art.10.33 a 36) Las modificaciones en el capítulo II son básicamente consecuencia de las nuevas competencias del secretario y de las resoluciones del mismo en la forma que establece la LEC art.206.2: diligencias de ordenación, decretos y diligencias de constancia, comunicación y ejecución. En este sentido se reforma la LPL art.49. En el art.50 se realizan adaptaciones en la regulación de la **sentencia in voce**. Se elimina el contenido del antiguo art.51 sobre la propuesta de resoluciones por el secretario, mientras que el nuevo artículo que toma este número establece los requisitos generales de las resoluciones procesales. La LPL art.52 sobre las diligencias de ordenación se deja sin contenido.

**Actos de comunicación** (LPL art.53 y 57 a 59 modif L 13/2009 art.10.37 y 10.40 a 42) Comienza el capítulo III sobre los actos de comunicación, con una **remisión general a la LEC** (LPL art.53). Entre los cambios en esta materia destaca, aparte de las adaptaciones, el de la LPL art.57 sobre la entrega de **copia** de la resolución o de cédula **al destinatario**. Para el supuesto en que éste no es hallado se **rebaja a 14 años** la edad de la persona –pariente, familiar o empleado– a la que puede ser entregada y se elimina la entrega a los vecinos.

Se aclaran y se hacen más eficientes las **advertencias al receptor** y se insiste en la remisión a la LEC art.161. También se modifica el **contenido de las cédulas** y la forma

42

43

44

45



de documentar su entrega (LPL art.58). Asimismo, es destacable la reforma de la LPL art.59 sobre la **notificación mediante edictos**. Esta se condiciona al fracaso de la notificación por otras vías y a que, después de realizadas las investigaciones pertinentes, no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero, recogiendo así de forma más explícita la doctrina constitucional en la materia.

## Proceso ordinario

### 1. Admisión de la demanda

- 47** Una de las reformas más importantes es la que afecta a la LPL art.81. La nueva redacción del precepto establece que (LPL art.81 modif L 13/2009 art.10.52):

1. El secretario judicial advertirá a la parte de los defectos u omisiones de carácter formal en que haya incurrido al redactar la demanda, a fin de que los subsane en el plazo de 4 días. (LPL art.81.1).

Además, la LPL art.81.3 añade que:

3. Realizada la subsanación, el secretario admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión.

- 48** De esta forma, se consagra la **distribución de competencias** en orden a la admisión: el secretario decide sobre la admisión y el órgano judicial sobre la inadmisión, lo que se considera adecuado a las exigencias del derecho a la **tutela judicial efectiva** (L 13/2009, preámbulo). El problema se produce a la hora de determinar el **ámbito del control** por parte del secretario. La nueva norma se refiere a **defectos u omisiones de carácter formal**, mientras que antes se refería a defectos, omisiones o imprecisiones. Pero de la LPL art.82 se desprende que el control de la demanda no se refiere únicamente a las exigencias de la LPL art.80.1 apartados a), b), e) y f), sino también a las precisiones más «sustantivas» de la LPL art.80.1.c) y d).

- 49** Por otra parte, la LEC art.403 establece que la **demandas** sólo podrá ser **inadmitida** en los casos y por las causas expresamente previstas por la ley. Los casos legales de inadmisión se vinculan a los **vicios** sobre la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, la falta de jurisdicción y competencia, la postulación y la defensa técnica cuando son preceptivas, la falta de aportación de las copias y de los documentos exigidos y el no agotamiento de vías previas. En el proceso laboral se mencionan de forma específica la **acumulación indebida** (LPL art.28) y la falta de reclamación previa o conciliación (LPL art.69, 71, 81.2 y 139). Con la nueva regulación **no parece que sea posible corregir**, en el trámite de admisión o por la práctica de «suspender o anular para subsanar», la ausencia de determinados presupuestos procesales como el litisconsorcio necesario o la inadecuación de procedimiento, lo que se había venido admitiendo (TS 8-6-93, RJ 4548; TS 17-7-93, RJ 5673; TS 5-5-00, RJ 2772; TS 19-4-05, RJ 5057). Tampoco es posible inadmitir por **cosa juzgada o litispendencia**. A

falta de un trámite como la audiencia previa, estos problemas tienen que ser tratados en el acto de juicio, como sucede en el juicio verbal. No hay que olvidar que la nueva inadmisión se vincula a los **defectos formales**; no a los defectos procesales. Por el contrario, si se aprecia la **falta de jurisdicción o de competencia** –objetiva, funcional o territorial– el Secretario no admitirá la demanda, sino que dará cuenta al órgano judicial para que en su caso proceda en la forma prevista en la LPL art.5 (nº 715).

Cambia el tratamiento procesal de la **falta de conciliación**, que ya no da lugar a la admisión provisional de la demanda, sino a la concesión de un plazo de 15 días para acreditar la celebración o el intento del acto de conciliación.

50

## 2. Acto de juicio: citación, conciliación, celebración del juicio y documentación de éste

**Citación** (LPL art.83.1 y 2 modif L 13/2009 art.10.54) Tras la admisión de la demanda, el secretario procede al señalamiento de los actos sucesivos de conciliación y juicio con un **intervalo temporal** ahora **único** de 15 días entre la citación y la celebración y atendiendo a los criterios de la LEC art.182. El secretario es también el competente para acordar la suspensión del acto de juicio y el desistimiento del demandante que no compareciera.

52

**Conciliación** (LPL art.84 modif L 13/2009 art.10.55) La conciliación ha pasado a ser competencia del secretario. Si hay avenencia, se aprobará **por decreto** con archivo de las actuaciones, salvo que el Secretario estime lesión grave, fraude de ley o abuso de derecho, en cuyo caso no aprobará el acuerdo, remitiendo a las partes al acto de juicio ante el órgano judicial (LPL art.84.1 y 2), lo que procederá, igualmente, cuando no haya avenencia. Se advierte, sin embargo, que es posible una **segunda conciliación** ante el órgano judicial, lo que no deja de ser consecuencia natural de lo previsto en la LEC art.19 en orden al poder de disposición de las partes sobre el proceso. Así se reconoce de forma expresa (LPL art.84.3), cuando se señala que corresponde al órgano judicial la aprobación del acuerdo que alcanzasen las partes a partir del comienzo de la celebración del acto de juicio. La intervención del Secretario es posible en caso de **suspensión del acto de juicio**.

53

**Acto de juicio y su documentación** (LPL art.85.1 y 5, 86.2 y 89 modif L 13/2009 art.10.56, 10.57 y 10.59) En la regulación del acto de juicio se producen innovaciones de importancia que giran en torno a la posición en él del secretario. De entrada, se modifica la LPL art.85.1 para eliminar la referencia al secretario en la **dación de cuenta**, lo que es consecuencia de que el Secretario no va a asistir siempre al acto de juicio. Además, se incluye una adición sobre la necesaria **fijación de los hechos** en los que exista conformidad o disconformidad (LPL art.85.5).

54

También se reforma la LPL art.86.2 para precisar que la **suspensión del juicio por prejudicialidad penal** se producirá cuando el órgano judicial considere que el documento tachado de falso pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.